

Quito D. M., 13 de agosto del 2009

DICTAMEN N° 0010-09-DTI-CC

CASO: 0009-09-TI

**LA CORTE CONSTITUCIONAL,
para el período de transición**

Juez Constitucional Sustanciador: Dr. Patricio Herrera Betancourt

I. ANTECEDENTES

El señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, mediante Oficio N.º T.1185-SGJ-09-1583 del 25 de junio del 2009, solicita que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 438 de la Constitución de la República del Ecuador, esta Corte Constitucional, para el período de transición, emita dictamen previo y vinculante de constitucionalidad respecto al texto del “Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

**II. TEXTO DEL PROTOCOLO FACULTATIVO A
LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRANTES.**

PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Reafirmando que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos,

Convencidos de la necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante denominada la Convención) y de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Recordando que los artículos 2 y 16 de la Convención obligan a cada Estado Parte a tomar medidas efectivas para prevenir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo territorio bajo su jurisdicción,

Reconociendo que los Estados tienen la responsabilidad primordial de aplicar estos artículos, que el fortalecimiento de la protección de las personas privadas de su libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos es una responsabilidad común compartida por todos, y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen las medidas nacionales,

Recordando que la prevención efectiva de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes requiere

educación y una combinación de diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo,

Recordando también que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos declaró firmemente que los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante todo en la prevención y pidió que se adoptase un protocolo facultativo de la Convención destinado a establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención,

Convencidos de que la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede fortalecerse por medios no judiciales de carácter preventivo basados en visitas periódicas a los lugares de detención,

Acuerdan lo siguiente:

Primera Parte

Principios generales

Artículo 1

El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 2

1. Se establecerá un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura (en adelante denominado el Subcomité para la Prevención) que desempeñará las funciones previstas en el presente Protocolo.

2. El Subcomité para la Prevención realizará su labor en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, así como por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad.

3. Asimismo, el Subcomité para la Prevención se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad.

4. El Subcomité para la Prevención y los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 3

Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante denominado el mecanismo nacional de prevención).

Artículo 4

1. Cada Estado Parte permitirá las visitas, de conformidad con el presente Protocolo, de los mecanismos mencionados en los artículos 2 y 3 a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse

personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito (en adelante denominado lugar de detención). Estas visitas se llevarán a cabo con el fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

2. A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente.

Parte II

El Subcomité para la Prevención

Artículo 5

1. El Subcomité para la Prevención estará compuesto de diez miembros. Una vez que se haya registrado la quincuagésima ratificación del presente Protocolo o adhesión a él, el número de miembros del Subcomité para la Prevención aumentará a veinticinco.

2. Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, en particular en materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad.

3. En la composición del Subcomité para la Prevención se tendrá debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes.

4. En esta composición también se tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada entre géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación.

5. El Subcomité para la Prevención no podrá tener dos miembros de la misma nacionalidad.

6. Los miembros del Subcomité para la Prevención ejercerán sus funciones a título personal, actuarán con independencia e imparcialidad y deberán estar disponibles para prestar servicios con eficacia en el Subcomité para la Prevención.

Artículo 6

1. Cada Estado Parte podrá designar, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, hasta dos candidatos que posean las calificaciones y satisfagan los requisitos indicados en el artículo 5, y, al hacerlo, presentarán información detallada sobre las calificaciones de los candidatos.

2.

a) Los candidatos deberán tener la nacionalidad de un Estado Parte en el presente Protocolo;

b) Al menos uno de los dos candidatos deberá tener la nacionalidad del Estado Parte que lo proponga;

c) No se podrá proponer la candidatura de más de dos nacionales de un Estado Parte;

d) Un Estado Parte, antes de proponer la candidatura de un nacional de otro Estado Parte, deberá solicitar y obtener el consentimiento de éste.

3. Al menos cinco meses antes de la fecha de la reunión de los Estados Partes en que deba procederse a la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas enviará una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General presentará una lista por orden alfabético de todos los candidatos designados de este modo, indicando los Estados Partes que los hayan designado.

Artículo 7

1. La elección de los miembros del Subcomité para la Prevención se efectuará del modo siguiente:

a) La consideración primordial será que los candidatos satisfagan los requisitos y criterios del artículo 5 del presente Protocolo;

b) La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de la entrada en vigor del presente Protocolo;

c) Los Estados Partes elegirán a los miembros del Subcomité para la Prevención en votación secreta;

d) Las elecciones de los miembros del Subcomité para la Prevención se celebrarán en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales el quórum estará constituido por los dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos miembros del Subcomité para la Prevención los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

2. Si durante el proceso de selección se determina que dos nacionales de un Estado Parte reúnen las condiciones establecidas para ser miembros del Subcomité para la Prevención, el candidato que reciba el mayor número de votos será elegido miembro del Subcomité para la Prevención. Si ambos candidatos obtienen el mismo número de votos se aplicará el procedimiento siguiente:

a) Si sólo uno de los candidatos ha sido propuesto por el Estado Parte del que es nacional, será miembro del Subcomité para la Prevención ese candidato;

b) Si ambos candidatos han sido propuestos por el Estado Parte del que son nacionales, se procederá a votación secreta por separado para determinar cuál de ellos será miembro;

c) Si ninguno de los candidatos ha sido propuesto por el Estado Parte del que son nacionales, se procederá a votación secreta por separado para determinar cuál de ellos será miembro.

Artículo 8

Si un miembro del Subcomité para la Prevención muere o renuncia, o no puede desempeñar sus funciones en el Subcomité por cualquier otra causa, el Estado Parte que haya presentado su candidatura podrá proponer a otra persona que posea las calificaciones y satisfaga los requisitos indicados en el artículo 5, teniendo presente la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre las distintas esferas de competencia, para que desempeñe sus funciones hasta la siguiente reunión de los Estados Partes, con sujeción a la aprobación de la mayoría de dichos Estados. Se considerará otorgada dicha aprobación salvo que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a contar del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.

Artículo 9

Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos por un mandato de cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de la mitad de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión a que se hace referencia en el apartado d) del párrafo 1 del artículo 7 designará por sorteo los nombres de esos miembros.

Artículo 10

1. El Subcomité para la Prevención elegirá su Mesa por un mandato de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.

2. El Subcomité para la Prevención establecerá su propio reglamento, que dispondrá, entre otras cosas, lo siguiente:

- a) La mitad más uno de sus miembros constituirán quórum;
- b) Las decisiones del Subcomité para la Prevención se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes;
- c) Las sesiones del Subcomité para la Prevención serán privadas.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la reunión inicial del Subcomité para la Prevención. Después de su reunión inicial, el Subcomité para la Prevención se reunirá en las ocasiones que determine su reglamento. El Subcomité para la Prevención y el Comité contra la Tortura celebrarán sus períodos de sesiones simultáneamente al menos una vez al año.

Parte III**Mandato del Subcomité para la Prevención**

Artículo 11

El mandato del Subcomité para la Prevención será el siguiente:

- a) Visitar los lugares mencionados en el artículo 4 y hacer recomendaciones a los Estados Partes en cuanto a la protección de las personas privadas de su libertad contra la

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b) Por lo que respecta a los mecanismos nacionales de prevención:

i. Asesorar y ayudar a los Estados Partes, cuando sea necesario, en la creación de sus mecanismos;

ii. Mantener contacto directo, de ser necesario confidencial, con los mecanismos nacionales de prevención y ofrecerles formación y asistencia técnica con miras a aumentar su capacidad;

iii. Ayudar y asesorar a los mecanismos nacionales de prevención en la evaluación de las necesidades y las medidas destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

iv. Hacer recomendaciones y observaciones a los Estados Partes con miras a reforzar la capacidad y el mandato de los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) Cooperar, para la prevención de la tortura en general, con los órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas así como con instituciones u organizaciones internacionales, regionales y nacionales cuyo objeto sea fortalecer la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 12

A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda cumplir el mandato establecido en el artículo 11, los Estados Partes se comprometen a:

a) Recibir al Subcomité para la Prevención en su territorio y darle acceso a todos los lugares de detención definidos en el artículo 4 del presente Protocolo;

b) Compartir toda la información pertinente que el Subcomité para la Prevención pueda solicitar para evaluar las necesidades y medidas que deben adoptarse con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) Alentar y facilitar los contactos entre el Subcomité para la Prevención y los mecanismos nacionales de prevención;

d) Examinar las recomendaciones del Subcomité para la Prevención y entablar un diálogo con éste sobre las posibles medidas de aplicación.

Artículo 13

1. El Subcomité para la Prevención establecerá, primeramente por sorteo, un programa de visitas periódicas a los Estados Partes para dar cumplimiento a su mandato de conformidad con el artículo 11.

2. Tras celebrar las consultas oportunas, el Subcomité para la Prevención notificará su programa a los Estados Partes para que éstos puedan, sin demora, adoptar las

disposiciones prácticas necesarias para la realización de las visitas.

3. Las visitas deberán realizarlas al menos dos miembros del Subcomité para la Prevención. Estos miembros podrán ir acompañados, si fuere necesario, de expertos de reconocida experiencia y conocimientos profesionales acreditados en las materias a que se refiere el presente Protocolo, que se seleccionarán de una lista de expertos preparada de acuerdo con las propuestas hechas por los Estados Partes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito. Para la preparación de esta lista, los Estados Partes interesados propondrán un máximo de cinco expertos nacionales. El Estado Parte interesado podrá oponerse a la inclusión de un experto concreto en la visita, tras lo cual el Subcomité para la Prevención propondrá el nombre de otro experto.

4. Si el Subcomité para la Prevención, lo considera oportuno, podrá proponer una breve visita de seguimiento después de la visita periódica.

Artículo 14

1. A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda desempeñar su mandato, los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a concederle:

a) Acceso sin restricciones a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número de lugares y su emplazamiento;

b) Acceso sin restricciones a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención;

c) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, acceso sin restricciones a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios;

d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con cualquier otra persona que el Subcomité para la Prevención considere que pueda facilitar información pertinente;

e) Libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las personas a las que desee entrevistar.

2. Sólo podrá objetarse a una visita a un determinado lugar de detención por razones urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves en el lugar que deba visitarse, que impidan temporalmente la realización de esta visita. La existencia de un estado de excepción no podrá alegarse como tal por el Estado Parte para oponerse a una visita.

Artículo 15

Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción contra una persona u organización por haber comunicado al Subcomité para la Prevención o a sus delegados cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Artículo 16

1. El Subcomité para la Prevención comunicará sus recomendaciones y observaciones con carácter confidencial al Estado Parte y, si fuera oportuno, al mecanismo nacional.

2. El Subcomité para la Prevención publicará su informe, juntamente con las posibles observaciones del Estado Parte interesado, siempre que el Estado Parte le pida que lo haga. Si el Estado Parte hace pública una parte del informe, el Subcomité para la Prevención podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Sin embargo, no podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

3. El Subcomité para la Prevención presentará un informe público anual sobre sus actividades al Comité contra la Tortura.

4. Si el Estado Parte se niega a cooperar con el Subcomité para la Prevención de conformidad con los artículos 12 y 14, o a tomar medidas para mejorar la situación con arreglo a las recomendaciones del Subcomité para la Prevención, el Comité contra la Tortura podrá, a instancias del Subcomité para la Prevención, decidir por mayoría de sus miembros, después de que el Estado Parte haya tenido oportunidad de dar a conocer sus opiniones, hacer una declaración pública sobre la cuestión o publicar el informe del Subcomité.

Parte IV

Mecanismos nacionales de prevención

Artículo 17

Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus disposiciones.

Artículo 18

1. Los Estados Partes garantizarán la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así como la independencia de su personal.

2. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar que los expertos del mecanismo nacional tengan las capacidades y los conocimientos profesionales requeridos. Se tendrá igualmente en cuenta el equilibrio de género y la adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país.

3. Los Estados Partes se comprometen a facilitar los recursos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención.

4. Al establecer los mecanismos nacionales de prevención, los Estados Partes tendrán debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.

Artículo 19

Los mecanismos nacionales de prevención tendrán como mínimo las siguientes facultades:

- a) Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
- b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas;
- c) Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.

Artículo 20

A fin de que los mecanismos nacionales de prevención puedan desempeñar su mandato, los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a darles:

- a) Acceso a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número de lugares de detención y su emplazamiento;
- b) Acceso a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención;
- c) Acceso a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios;
- d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con cualquier otra persona que el mecanismo nacional de prevención considere que pueda facilitar información pertinente;
- e) Libertad para seleccionar los lugares que deseen visitar y las personas a las que deseen entrevistar;
- f) El derecho a mantener contactos con el Subcomité para la Prevención, enviarle información y reunirse con él.

Artículo 21

1. Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra ninguna persona u organización por haber comunicado al mecanismo nacional de prevención cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

2. La información confidencial recogida por el mecanismo nacional de prevención tendrá carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

Artículo 22

Las autoridades competentes del Estado Parte interesado examinarán las recomendaciones del mecanismo nacional

de prevención y entablarán un diálogo con este mecanismo acerca de las posibles medidas de aplicación.

Artículo 23

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.

Parte V

Declaración

Artículo 24

1. Una vez ratificado el presente Protocolo, los Estados Partes podrán hacer una declaración aplazando la aplicación de sus obligaciones en virtud de la parte III o de la parte IV.

2. Este aplazamiento tendrá validez por un período máximo de tres años. Después de oír los argumentos del Estado Parte y en consulta con el Subcomité para la Prevención, el Comité contra la Tortura podrá prorrogar este período por otros dos años.

Parte VI

Disposiciones financieras

Artículo 25

1. Los gastos en que incurra el Subcomité para la Prevención en la aplicación del presente Protocolo serán sufragados por las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones asignadas al Subcomité para la Prevención en virtud del presente Protocolo.

Artículo 26

1. Se creará un Fondo Especial con arreglo a los procedimientos de la Asamblea General, que será administrado de conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, para contribuir a financiar la aplicación de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención a un Estado Parte después de una visita, así como los programas de educación de los mecanismos nacionales de prevención.

2. Este Fondo Especial podrá estar financiado mediante contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras entidades privadas o públicas.

Parte VII

Disposiciones finales

Artículo 27

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados que hayan firmado la Convención.

2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la Convención o se

haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido a él del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.

Artículo 28

1. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 29

Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

Artículo 30

No se admitirán reservas al presente Protocolo.

Artículo 31

Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones que los Estados Partes puedan haber contraído en virtud de una convención regional que instituya un sistema de visitas a los lugares de detención. Se alienta al Subcomité para la Prevención y a los órganos establecidos con arreglo a esas convenciones regionales a que se consulten y cooperen entre sí para evitar duplicaciones y promover efectivamente los objetivos del presente Protocolo.

Artículo 32

Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones de los Estados Partes en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977 o la posibilidad abierta a cualquier Estado Parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención en situaciones no cubiertas por el derecho internacional humanitario.

Artículo 33

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida

al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará seguidamente a los demás Estados Partes en el presente Protocolo y la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.

2. Esta denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone el presente Protocolo con respecto a cualquier acción o situación ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia o las medidas que el Subcomité para la Prevención haya decidido o pueda decidir adoptar en relación con el Estado Parte de que se trate, ni la denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto que el Subcomité para la Prevención haya empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.

3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia del Estado Parte, el Subcomité para la Prevención no empezará a examinar ninguna cuestión nueva relativa a dicho Estado.

Artículo 34

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación un tercio al menos de los Estados Partes se declara a favor de la convocación, el Secretario General convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptación.

2. Una enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 35

A los miembros del Subcomité para la Prevención y de los mecanismos nacionales de prevención se les otorgará las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones. A los miembros del Subcomité para la Prevención se les otorgará las prerrogativas e inmunidades especificadas en la sección 22 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, con sujeción a las disposiciones de la sección 23 de dicha Convención.

Artículo 36

Durante la visita a un Estado Parte, y sin perjuicio de las disposiciones y objetivos del presente Protocolo y de las

prerrogativas e inmunidades de que puedan gozar, los miembros del Subcomité para la Prevención deberán:

- a) Observar las leyes y los reglamentos del Estado visitado;
- b) Abstenerse de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.

Artículo 37

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones remitirá copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados.

III. SOLICITUD DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR EC. RAFAEL CORREA DELGADO

Mediante Oficio N.º T.1185-SGJ-09-1583 del 25 de junio del 2009, suscrito por el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, y dirigido al Presidente de la Corte Constitucional, Dr. Patricio Pazmiño, manifiesta: “Adjunto a la presente se servirá encontrar el acuerdo de la Ref: “Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, el cual, es necesario para fortalecer la protección de las personas privadas de libertad contra la tortura y para establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención.

Señala que en su momento, el Tribunal Constitucional, mediante dictamen N.º 0004-2007-CI, publicado en el Registro Oficial N.º 233 del 17 de diciembre de 2007, dictaminó favorablemente respecto a dicha Convención; sin embargo, mientras estuvo vigente la Constitución Política de 1998, el órgano legislativo competente nunca resolvió su aprobación.

Refiere que según con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República, la ratificación de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando se refieran a los derechos y garantías establecidos en la Constitución.

En tal virtud, y por cuanto de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del art. 438 de la Carta Magna, la Corte Constitucional debe emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de los tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional, solicita “...se expida el correspondiente dictamen”.

ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN

La Cancillería, con fecha 01 de agosto del 2007, remitió el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a la Presidencia del Congreso mediante Oficio 34338/GM/DGT/2007 por ser un tratado internacional sujeto a

ratificación. Señala que el 18 de diciembre del 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el texto del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigencia internacional el 22 de junio del 2006. El Protocolo Facultativo pretende ser un mecanismo internacional para la prevención de la tortura y, según reza el preámbulo del texto del Protocolo, fue diseñado con la finalidad de alcanzar los objetivos de la Convención contra la Tortura y fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, mediante Dictamen N.º 238-ATJ-2007 del 18 de julio del 2007, concluyó que el “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” no se contraponen al ordenamiento jurídico ecuatoriano; los mecanismos, procedimientos y compromisos no son opuestos a los principios o normas que sobre derechos humanos se vienen aplicando en el País. Se puntualizó, asimismo, que la incorporación del País al Protocolo constituirá, a criterio de esa asesoría, un aporte fundamental para reforzar la voluntad estatal en la materia y, especialmente, complementar los compromisos contenidos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

a. Competencia

La Corte Constitucional es competente para emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de los Tratados Internacionales que el Ecuador suscriba, previo a la ratificación de la Asamblea Nacional, de conformidad con el art. 438, numeral 1 de la Constitución y art. 37 de las Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el período de transición (en adelante “Reglas de Procedimiento”).

La solicitud de dictamen previo y vinculante del “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” ingresó para conocimiento del Tribunal Constitucional el 11 de septiembre del 2007, por lo que de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 276 de la Constitución Política de la República de 1998, el Tribunal Constitucional procedió a emitir su dictamen de constitucionalidad el 27 de noviembre del 2007, el mismo que fue remitido al Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República; sin embargo, mientras estuvo vigente la Constitución Política de 1998, el órgano legislativo competente nunca resolvió su aprobación. En virtud de la vigencia de la nueva Constitución, corresponde examinar el Protocolo sometido a dictamen de acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales, es así que en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del art. 419 de la Constitución de la República, la ratificación de los tratados internacionales cuando se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución, requieren la aprobación previa de la Asamblea Nacional, y al amparo de lo dispuesto en el numeral 1 del art. 438 de la Constitución, la Corte Constitucional debe emitir dictamen previo y vinculante de

constitucionalidad de los tratados internacionales, previamente a su aprobación por parte de la Asamblea Nacional.

De conformidad con lo establecido en el art. 38 de las Reglas de Procedimiento, el día 30 de junio del 2009, se procedió a efectuar el sorteo de rigor, correspondiendo al Dr. Patricio Herrera Betancourt sustanciar la presente causa en calidad de Juez Sustanciador de la Tercera Sala.

El día 06 de julio del 2009, la Tercera Sala de la Corte Constitucional avoca conocimiento de la presente causa y dispone notificar con el contenido de la providencia, al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador.

b. Del trámite de aprobación del Instrumento Internacional

El Art. 438 de la Constitución dispone: “La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley: 1. Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional...”. El dictamen que emita esta Corte Constitucional constituye un paso previo a la aprobación o no por parte de la Asamblea Nacional del texto del Protocolo en cuestión. Así, de acuerdo a la Constitución, le corresponde a la Presidenta o Presidente de la República la ratificación de los Tratados y otros instrumentos internacionales (Art. 418) de modo directo o, en su defecto, mediante referéndum solicitado por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República (art. 420), de modo indirecto. La Asamblea Nacional aprueba el texto del Tratado –no lo ratifica siempre y cuando se cumplan los presupuestos normativos consagrados en el art. 419, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el caso de análisis, se requiere previamente la aprobación del Protocolo por parte de la Asamblea Nacional, previo a la ratificación por parte del Ejecutivo, por tratarse de un instrumento internacional que se refiere a los derechos y garantías establecidos en la Constitución. (Art. 419 numeral 4).

c. Control de constitucionalidad del Protocolo

El Estado, al momento de hacerse parte de un Instrumento Internacional o Tratado, debe cerciorarse de que no hay incompatibilidad con la Constitución, por lo que es preciso efectuar un control de constitucionalidad formal y material del Protocolo como requisito previo a su perfeccionamiento. El análisis, tanto formal como material constituye un estudio integral del texto del instrumento internacional; es decir, equivale a evaluar en conjunto sus disposiciones con las de la Constitución y así determinar su compatibilidad o no con la Carta Magna. Esto excluye la posibilidad de que a futuro se plantee la acción pública de inconstitucionalidad sobre tal o cual tratado, porque de lo contrario se estaría desnaturalizando la figura del control previo y vinculante que consagra el art. 438 de la Constitución. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional al dictaminar sobre en el caso 0001-09-TI.

Control Formal del Protocolo.- La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada por la Asamblea General el 09 de diciembre de 1975. La Declaración Universal de los Derechos Humanos,

en su artículo 5, consagra: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Guardando armonía con estas normas internacionales, el Ecuador ratificó la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes el 21 de septiembre de 1995, cuya Codificación se publicó en el Suplemento N.º 153 del Registro Oficial del 25 de noviembre del 2005.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes es uno de los instrumentos internacionales más importantes de derechos humanos en la lucha contra la tortura. Contempla derechos de las víctimas de tortura, tales como: “Rehabilitación, para reintegrar la salud física y mental de la víctima de tortura. Lograr la restitución, que intenta ubicar a la víctima a como era antes de ser torturada. Indemnización, para compensar totalmente por los daños causados, tanto materiales como físicos, morales y espirituales. Satisfacción y garantía de no repetición, para reparar el daño hecho a la víctima y restablecer su dignidad”.

Cuando un país ha firmado y ratificado la Convención, el Gobierno de ese país es responsable, bajo la ley internacional, de tomar acciones para prevenir la tortura y ayudar a las víctimas cuando ocurren actos de tortura. Ecuador ratificó esta Convención en 1988.

El 18 de diciembre del 2002, la Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Este Protocolo establece mecanismos internacionales y nacionales de visitas para impedir la tortura en los lugares de detención. Ecuador suscribió este Protocolo Facultativo el 24 de mayo del 2007, faltando aún su ratificación, la cual es supremamente crucial para trabajar por un Ecuador sin tortura.

En relación al contenido de este instrumento internacional a aprobarse y ratificarse, es pertinente realizar un breve análisis.

Previo al envío, por parte del Ejecutivo, del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes a la Corte Constitucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración se pronunció a favor del contenido del mismo. Al ser un Tratado que compromete al país en la defensa de los derechos y garantías de las personas, se ha iniciado el trámite previsto en los artículos 417, 418, 419 numeral 4 y 438 de la Constitución.

Control Material del Protocolo.- Luego de un análisis en conjunto de las disposiciones del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, con las normas consagradas en la Constitución, esta Corte realiza las siguientes puntualizaciones:

El Preámbulo del Protocolo reafirma que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos; que es necesario adoptar medidas para alcanzar los objetivos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, así como

fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura; que la Convención, en los artículos 2 y 16, obliga a los Estados, en el ámbito de su jurisdicción territorial, a tomar medidas efectivas para prevenir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos declaró que los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse sobre todo en la prevención, por lo que solicitó que se adopte un Protocolo facultativo de la Convención, destinado a establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención.

En la Primera Parte de los Principios Generales consta que el objetivo del Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El artículo 2 compuesto por los numerales 1, 2, 3 y 4 establece que se conformará un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura; que este Subcomité realizará su labor en el marco de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones y normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad; que se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad, así como que los Estados partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo.

Los artículos 3 y 4 establecen que en cada Estado Parte se designará uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Segunda Parte, relativa al Subcomité para la Prevención, precisa en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 su composición e integración, su forma de elección, designación y funcionamiento, tomando en cuenta la calificación moral, versación en la materia, la distribución geográfica, la representación equilibrada entre géneros; sus miembros actuarán a título personal con independencia e imparcialidad.

En la Tercera Parte, relativa al Mandato del Subcomité para la Prevención, los artículos 11, 12, 13 y 14 contienen el referido mandato del Subcomité para realizar visitas a los lugares en los que las personas se encuentren privadas de su libertad; asesorar y ayudar a los Estados Partes cuando sea necesario; hacer recomendaciones y observaciones a los Estados Partes; los compromisos de los Estados Partes en relación al Subcomité, como recibirlo en su territorio, compartir información pertinente; alentar y facilitar los contactos entre el Subcomité para la Prevención y los mecanismos nacionales de prevención; examinar las recomendaciones del Subcomité y los compromisos de permitir el acceso sin restricciones a toda información sobre las personas privadas de su libertad y entrevistarse con ellas.

El artículo 15 refiere que ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción contra una persona u organización por haber comunicado al Subcomité para la Prevención o a sus delegados cualquier información.

El artículo 16 contempla que el Subcomité para la Prevención comunicará sus recomendaciones y

observaciones con carácter confidencial al Estado Parte; así como hace alusión a la publicación del informe, conjuntamente con las posibles observaciones del Estado Parte, si así lo hubiere solicitado.

En la Parte IV de los Mecanismos nacionales de prevención, los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 determinan los diferentes mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional, como tomar medidas para garantizar que los expertos del mecanismo nacional tengan las capacidades y los conocimientos profesionales requeridos, teniendo en cuenta el equilibrio de género y la adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país.

El artículo 21 precisa que ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra ninguna persona u organización por haber comunicado al mecanismo nacional de prevención cualquier información; y que la información confidencial recogida por el mecanismo nacional de prevención tendrá carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

El artículo 22 contiene el compromiso de que las autoridades competentes del Estado Parte interesado examinarán las recomendaciones del mecanismo nacional de prevención y entablarán un diálogo acerca de las posibles medidas de aplicación.

El artículo 23 prevé que los Estados Partes se comprometen a publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.

La Parte V sobre la Declaración establece en el artículo 24 que una vez ratificado el presente Protocolo, los Estados Partes podrán hacer una declaración aplazando la aplicación de sus obligaciones en virtud de la parte III o de la parte IV; que dicho aplazamiento tendrá validez por un período máximo de tres años. Después de oír los argumentos del Estado Parte y en consulta con el Subcomité para la Prevención, el Comité contra la Tortura podrá prorrogar este período por otros dos años.

La Parte VI sobre Disposiciones financieras, en los artículos 25 y 26 contempla que los gastos en los que incurra el Subcomité para la Prevención en la aplicación del presente Protocolo serán sufragados por las Naciones Unidas; que el Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones asignadas al Subcomité; la creación de un Fondo Especial con arreglo a los procedimientos de la Asamblea General para contribuir a financiar la aplicación de las recomendaciones del Subcomité, los programas de educación de los mecanismos nacionales de prevención, fondos que también podrán estar financiados mediante contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras entidades privadas o públicas.

La Parte VII de las Disposiciones finales, prevé, en los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 aspectos relacionados con la firma de todos los Estados, la sujeción a la ratificación por cualquier Estado o que se haya adherido a ella; su entrada en vigor, aplicación, e inadmisión y reservas al presente Protocolo.

Los artículos 31 y 32 prevén que las disposiciones del Protocolo no afectarán a las obligaciones que los Estados Partes puedan haber contraído en virtud de una convención regional que instituya un sistema de visitas a los lugares de detención, o en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales del 08 de junio de 1977 o la posibilidad abierta a cualquier Estado Parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención en situaciones no cubiertas por el derecho internacional humanitario.

El artículo 33 se refiere a la denuncia y sus efectos que puede realizar cualquier Estado Parte.

El artículo 34 contiene las enmiendas, su depósito en poder del Secretario General de las Naciones Unidas y su entrada en vigor.

Los artículos 35 y 36 establecen que a los miembros del Subcomité para la Prevención y de los mecanismos nacionales de prevención se les otorgará las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, sin perjuicio de las cuales deberán observar las leyes y los reglamentos del Estado visitado y abstenerse de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.

Y el artículo 37 contempla que el presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados.

De la referencia reseñada se puede establecer que el propósito de este Protocolo es prevenir que las personas privadas de su libertad, en centros o lugares de detención, sean sometidas a torturas o a tratos crueles o degradantes y por el contrario, que reciban un trato digno, para lo cual se conformarán instancias como el Subcomité para la Prevención, integrado por 10 miembros de los Estados Partes, que realizará programas de visitas periódicas, podrán visitar los lugares de detención y entrevistarse con las personas privadas de su libertad, comprometiéndose a su vez, los Estados Partes, a proporcionar información sin restricciones al Subcomité, permitir sus visitas, examinar sus recomendaciones y entablar un diálogo sobre las posibles medidas de aplicación.

Los Estados Partes de la Convención, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, reconocieron que los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana emanan de la dignidad inherente de la persona humana, noción que más allá de la connotación espiritual y moral es, sobre todo, la expresión de la voluntad, esto es, la autodeterminación consciente y responsable de su propia vida. Conciencia de la dignidad del hombre que ha venido exigiendo prestaciones positivas de los Estados para que sea posible mejorar sus condiciones de vida, incluso cuando se encuentra privado de su libertad, en centros de detención que en la mayoría de las veces son verdaderas escuelas del delito y no espacios de rehabilitación humana y social, en cuyo caso, de acuerdo a las legislaciones penales, la persona sometida a una pena tiene interdicción de ciertos derechos políticos y civiles, como sería la libertad ambulatoria o el

derecho de participación, pero bajo ningún concepto pierden sus derechos humanos derivados de su dignidad como ser humano, y en ese sentido no puede ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante por el hecho de haber delinquido, en la mayoría de las veces por no haber tenido igualdad de oportunidades en el trabajo o en el estudio, sea por razones de pobreza, género, condición social, o por carecer de una familia constituida y sólida en valores.

La Corte Constitucional en el Control Previo de los Instrumentos Internacionales

Esta Corte Constitucional observa que dichos objetivos se enmarcan en el propio Preámbulo de la Constitución que claramente define a la República del Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Por mandato constitucional tiene como uno de sus pilares fundamentales el respeto de los derechos humanos; reconoce y garantiza su plena vigencia y aplicación directa, siendo la Corte Constitucional el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos y al ser el objetivo del Protocolo, conforme lo contempla el Art. 1, el: "Establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", esta normativa guarda consonancia con los preceptos constitucionales que determinan que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, y que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.

De manera puntual, la Constitución de la República consigna que es deber primordial del Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (art. 3, numeral 1). Por su parte, el art. 51 de la Constitución de la República reconoce a las personas privadas de la libertad, entre otros derechos, a no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria; a la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho, y a declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante su privación de la libertad, y el art. 66 consagra: "Se reconoce y garantiza a las personas [...]c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Por tanto, el bien supremo del Estado constituye la vida y la integridad de las personas, a las que está llamado a proteger y garantizar.

En consecuencia, este instrumento internacional permite dar concreción y reforzar el compromiso y la voluntad estatal contenidos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el Ecuador el 21 de septiembre de 1995, tanto en sus contenidos referidos a los objetivos, como a sus

principios generales, así como a los mecanismos de implementación de un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura que responderá a mandatos concretos determinados en este Protocolo; por lo que, la Corte Constitucional encuentra que sus disposiciones guaran consonancia con los principios, valores, derechos y normas de la Constitución de la República, por lo que considera que no existe impedimento para su aprobación y ratificación, en aplicación del procedimiento contemplado constitucionalmente para el efecto.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, en ejercicio de sus atribuciones,

DICTAMINA:

1. Emitir dictamen favorable de constitucionalidad del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, por cuanto es compatible con la vigente Constitución de la República del Ecuador y, por consiguiente, se debe continuar con el proceso de aprobación.
2. Declarar que al mantener el Acuerdo examinado plena armonía y concordancia con los preceptos consagrados en la Norma Fundamental ecuatoriana, es procedente continuar con el trámite pertinente para su aprobación y posterior ratificación.
3. Devolver el expediente al señor Presidente Constitucional de la República.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.

Razón: Siento por tal, que el Dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, con siete votos a favor, de los señores doctores: Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Diego Pazmiño Holguín, Fabián Sancho Lobato, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire; sin contar con la presencia de los doctores: Luis Jaramillo Gavilanes y Hernando Morales Vinueza, en sesión extraordinaria del día jueves 13 de agosto del 2009. Lo certifico.

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por- f.) Ilegible.- Quito, a 7 de septiembre del 2009.- f.) El Secretario General.

D. M., Quito, 1 de septiembre del 2009

SENTENCIA INTERPRETATIVA N° 0003-09-SIC-CC

CASO N° 0011-09-IC

Juez Constitucional Ponente: Dr. Edgar Zárate Zárate

I. ANTECEDENTES:

Dra. Tania Arias Manzano, Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, mediante escrito ingresado el 22 de junio del 2009 a la Secretaría General de la Corte Constitucional, solicita a los Jueces y Juezas de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, que procedan a interpretar el artículo 18 del Régimen de Transición de la Constitución; el último inciso del artículo 17 del mencionado Régimen de Transición; el numeral 12 del artículo 208 de la Constitución de la República y el artículo 76 de la Constitución de la República, a fin de que se determine su alcance y espíritu, según le corresponde el propio texto de la Constitución, y guiada por la naturaleza del Estado ecuatoriano. En tal virtud, se procede con lo establecido en el artículo 436.1 de la Constitución de la República vigente y artículos 19, 20 y siguientes de las Reglas del Procedimiento para la Ejecución de las Competencias de la Corte Constitucional, para el periodo de transición.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de las Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, certificó que la acción de interpretación constitucional N.º 0011-09-IC, respecto de las disposiciones arriba anotadas, no ha sido presentada anteriormente con identidad de sujeto, objeto y acción. Igualmente, la Sala de Admisión, conformada por los doctores: Patricio Pazmiño, Roberto Bhrunis Lemarie y Edgar Zárate Zárate, el 12 de agosto del 2009 a las 17H05, de conformidad con la Resolución del 20 de octubre publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 451 del 22 de octubre del 2008 y en base a las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de Competencias de la Corte Constitucional, consideró en lo principal: “Admitir” a trámite la solicitud de interpretación constitucional antes identificada.

El 26 de agosto del 2009, se realizó el sorteo de rigor, tal como lo establece el art. 8 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, consecuencia de lo cual se radicó el caso en la Segunda Sala de Sustanciación de la Corte Constitucional, siendo designado luego del sorteo correspondiente como Juez Constitucional Sustanciador el **Dr. Edgar Zárate Zárate**.

Normas constitucionales cuya interpretación se solicita

Constitución de la República del Ecuador, Artículo 18 del Régimen de Transición; el último inciso del Artículo 17 del Régimen de Transición; el numeral 12 del artículo 208 de la Constitución; y el artículo 76 de la Constitución. (Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008).